
NEOLIBERALISMO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y CULTURA DE AUTOGESTIÓN PARA EL DESARROLLO EN MÉXICO Y CHILE

María Guadalupe ORTIZ GÓMEZ
CONACYT-Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

RESUMEN

El neoliberalismo es un proyecto cultural. Una característica relevante de dicho proyecto es que plantea una reformulación de los roles del Estado, el mercado y la sociedad. En este contexto los gobiernos que han adoptado dicho modelo promueven valores y prácticas favorables a éste mediante la política pública. Sin embargo, existen resistencias tanto por parte de los ciudadanos, como por parte de los agentes gubernamentales, a asumir los nuevos roles que les son impuestos. En este trabajo se analiza la forma en que el neoliberalismo, como proyecto cultural, se encarna en los procesos de implementación de políticas dirigidas a pueblos indígenas de México y Chile.

Palabras clave: cultura de la autogestión para el desarrollo, neoliberalismo, políticas públicas.

NEOLIBERALISM, PUBLIC POLICY, AND CULTURE OF SELF-DEVELOPMENT IN MEXICO AND CHILE ABSTRACT

Neoliberalism is a cultural project. An important feature of this project is that it poses a reformulation of the roles of the state, market and society. In this context, governments that have adopted this model are promoting values and practices favorable to it through public policy. However, there is resistance from both citizens and government agents to take on new roles that have been imposed. This work analyses the way that neoliberalism, as a cultural project, is embodied in the process of implementation of policies conducted to indigenous people of Mexico and Chile.

Keywords: Culture of self-development, neoliberalism, public policies.

INTRODUCCIÓN

El neoliberalismo –como modelo de Estado– implica profundos cambios en los diferentes órdenes de la vida social. Los roles del Estado, el mercado y la sociedad se redefinen.¹ El mercado es concebido como el ente regulador de la distribución del ingreso, en sustitución del Estado. Por su parte, a éste se le encomienda la función de crear las condiciones óptimas para el libre mercado, dejando de lado la responsabilidad social (Harvey, 2009). Finalmente, la sociedad, los ciudadanos, deben volverse más activos en la solución de sus propios problemas y en la búsqueda de sus opciones de desarrollo.

El modelo neoliberal requiere de una ciudadanía “autogestiva” (al estilo neoliberal), participativa, solidaria y cohesionada, que sea capaz de enfrentar los desafíos que se le imponen en un mundo de libre mercado. Es por ello que la política pública que se ha promovido desde los organismos internacionales, desde hace ya más de tres décadas, tienden a generar las condiciones culturales para el funcionamiento del modelo neoliberal. Margaret Thatcher señalaba que “La economía es el método (...) pero el objetivo es cambiar el alma” (Thatcher, citada en Harvey, 2009:29).

Desde organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, se promueven ideas, valores y prácticas acordes al modelo de Estado neoliberal. Mediante condicionamientos, dichos organismos presionan a los países deudores para que adopten sus postulados. Montufar argumenta que se le ha dado poca importancia a la función que han tenido estos organismos, a través de lo que define como la asistencia internacional para el desarrollo (AID), en la determinación de las acciones emprendidas por los países pobres a favor de un proyecto modernizador (Montufar, 2001:46). Por tanto, para entender los procesos internos de los países en desarrollo se deben considerar seriamente las influencias que han tenido los organismos internacionales. Así, observamos que los planes de los gobiernos nacionales, por lo general, obedecen a los lineamientos establecidos desde estos organismos internacionales. Por ello, podemos encontrar muchas similitudes en las agendas políticas de diferentes gobiernos latinoamericanos.

En este contexto hay un tema que adquiere una gran relevancia, es el de la cultura ciudadana. Los ciudadanos neoliberales deben adquirir una amplia responsabilidad en la búsqueda de su desarrollo. Ya que el Estado se enfoca en el mantenimiento del orden y abandona sus responsabilidades sociales, los ciudadanos tienen que enfrentar por sí mismos los desafíos impuestos por el libre mercado. Para ello, se necesita una cultura ciudadana que dé sustento al modelo y lo vuelva funcional. Se trata de una serie de ideas que promueven ciertas prácticas mediante programas de política pública dirigida a los diferentes sectores sociales. Entre dichas ideas destacan las referentes a participación ciudadana, capital social, capital humano, solidaridad, autogestión, entre otras. Ese conjunto de ideas y valores es lo que en este trabajo se denomina cultura de la autogestión para el desarrollo (CAD).²

A pesar de que la promoción de la CAD forma parte de una estrategia global, los resultados de ésta pueden ser diferentes en función de las especificidades de cada localidad o grupo social. Por ejemplo, para el caso de las reformas institucionales, encontramos que los esquemas de la nueva gestión pública no tienen una aplicación directa en sociedades como las latinoamericanas, porque existe una cultura clientelista aún muy vigente. Las particularidades que presentan las sociedades latinoamericanas implican que su aplicación en esta región se vuelve problemática e incierta, cuestión que no ha sido considerada por sus promotores (Assies, 2003; Nickson, 2003). Asimismo, la CAD encuentra obstáculos culturales para su adopción, tanto por parte de los ciudadanos, como de los agentes gubernamentales.

En este trabajo se harán algunas reflexiones en torno al modelo neoliberal, la CAD y su relación con la política pública. De igual forma se analizarán algunas de las condiciones culturales que representan un desafío para la promoción de la CAD en sociedades rurales de América Latina, específicamente los casos de Chile y México.

El trabajo se divide en tres grandes apartados. En el primero se presenta un panorama general de la relación que existe entre la política pública y el neoliberalismo como proyecto de Estado. En el segundo se define y problematiza el término central de este trabajo, que es el de Cultura de la Autogestión para el Desarrollo. Para concluir, se

presentan algunas reflexiones, haciendo comentarios generales sobre los casos de Chile y México.

NEOLIBERALISMO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

El neoliberalismo puede ser entendido de varias formas. Por lo general se le concibe como un proyecto político y económico que tiene repercusiones en la esfera social. Un acercamiento reciente al tema resalta la existencia de un componente cultural importante (Grimson, 2007; Assies, 1999; Harvey, 2009; Ortiz, 2010). Al tratarse de un modo específico de distribución de la riqueza, sus alcances son multidimensionales; ello hace que su estudio sea complejo y exige plantearse recortes específicos que sirvan de guía para no extraviarse en el universo de fenómenos que surgen de él.³ En este trabajo se parte de la idea de que las políticas públicas son uno de los vehículos a través de los cuales se le da cuerpo al proyecto, mediante una serie de reformas a las instituciones gubernamentales y los ordenamientos jurídicos, a la vez que se promueven ideas que contribuyen a justificar las nuevas relaciones entre Estado, mercado y sociedad. En este contexto, la política social adquiere un papel relevante, ya que se ha utilizado como un instrumento para amortiguar el costo social del modelo (Ezcurra, 1998; Duhau, 2001; Torres, 1996; Assies, Calderón y Salman, 2001; Pinheiro, 1995).

El neoliberalismo es un modelo que ha pasado por varias etapas, desde la década de los setenta del siglo XX. Algunos de sus postulados se han reformulado, pero existen ciertas continuidades. En la etapa fundacional existió una ortodoxia neoliberal originaria, cuya tesis básica era que:

“...el mercado constituye el mejor instrumento, el más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades. Un mecanismo de autorregulación que conduciría al óptimo social y que, por ello, resultaría intrínsecamente superior. (...) dicha ortodoxia exaltó virtudes de un Estado mínimo e impugnó vivamente al Estado de Bienestar y, en general, al Estado como dispositivo de redistribución en beneficio de las clases desfavorecidas” (Ezcurra, 1998:14; ver también Durán, 2001).

El fondo de tal idea persiste en la actualidad, sin embargo se le han hecho algunos matices. Ya no se habla de Estado mínimo, sino de Estado eficaz, ya que se aceptan algunas funciones de éste en material de redistribución.

La agenda política de esta primera fase se basó en cuatro ideas clave:

1. La promoción del máximo crecimiento económico de libre mercado.
2. Un aumento de la tasa de ganancia del capital privado.
3. Una reducción de los costos salariales, una merma en el costo de la fuerza de trabajo y una bandera neoliberal decisiva y distintiva.
4. Una firme contención del gasto público social (Ezcurra, 1998:15).

Esta primera fase tuvo su puesta en práctica a fines de los años setenta con las administraciones de Margaret Thatcher (en Gran Bretaña) y Ronald Reagan (en Estados Unidos). Se difundió en buena parte de los países de Europa occidental, pero también en América Latina, gracias a la crisis de pago de las deudas externas, siendo Chile un caso paradigmático por las condiciones políticas y sociales que prevalecían en ese país durante esos años (Harvey, 2009).

Muy tempranamente el modelo sufrió algunos de sus primeros cambios, principalmente en dos ámbitos. Por un lado, se fijaron los parámetros de un programa económico relativamente uniforme de alcance planetario, plasmado en los llamados ajustes estructurales, que por encima de diferencias nacionales exhibieron un diseño común.

En los años ochenta una nota distintiva fue que el mercado mundial pasó a ser considerado como el principal mecanismo de asignación de recursos. Se puso el acento en la búsqueda de la

competitividad, lo que agudizó la política de deprimir el costo de la fuerza de trabajo y los salarios. “El trabajo, pues, retrocedió al papel de mera mercancía comprada al menor precio posible” (Ezcurra, 1998:16). La idea ortodoxa persistió y se agudizó, ya que existe todavía en el presente, nuevamente intensificada mediante programas de flexibilización laboral.

Por otra parte, durante la primera administración de Reagan (1980-1983), la ortodoxia neoliberal sufrió su cambio más significativo, pues fue re-articulada por el pensamiento neoconservador que derivó en dos novedades principales.

La primera se refiere a que se realizó un ensamble entre el ideario neoliberal con valores democráticos, lo que “...consolidó un proyecto de sociedad integral, que no se limita al terreno económico y abarca al régimen político (...) se robusteció el impulso de una transformación global de las sociedades, una tendencia que perduró y se acentuó en los 90’s (sobre todo, con la incorporación de un régimen específico de ‘políticas sociales’)” (Ezcurra, 1998:16-17).

La segunda novedad fue una renovada voluntad internacionalista de estirpe neoconservadora que incita la expansión mundial del programa, en un intento de homogeneización de alcance planetario. Ello permite afirmar que “...desde principios de los 80’s se ha perfilado un programa neoliberal-conservador (o un neoconservadurismo-liberal), de factura estadounidense, que impulsa un proyecto de sociedad que es a la vez integral y mundial” (Ezcurra, 1998:17).

Lo que es un proyecto inédito en la historia. En este sentido, el ideario neoliberal-conservador ha logrado establecerse como una potente fuerza ideológica a escala global. Para ello, se han valido de diferentes estrategias que incluyen, por ejemplo, la formación de think tanks, el manejo de medios masivos de comunicación, la formación de líderes de opinión, de creación de premios, de institutos de investigación, etcétera (Mato, 2007; Harvey, 2009; Ortiz, 2014).

Es importante resaltar el papel que han tenido las agencias internacionales de financiamiento, que se han convertido en un dispositivo clave para la implantación de los ajustes estructurales en los

países del sur y más tarde en los de Europa del este (Montufar, 2001). Tales agencias son organismos multilaterales, cuyos miembros son los Estados, donde la capacidad resolutoria de cada país es proporcional al capital comprometido. Ello propicia que los países ricos tengan un rol decisivo en la definición de políticas y en la toma de decisiones (Ezcurra, 1998:18).

En este sentido, podemos afirmar que existe una importante pérdida de soberanía, ya que las agendas de los gobiernos de países deudores se encuentran altamente determinadas por los lineamientos de los organismos multilaterales. Ello tiene como consecuencia que, en los hechos, la democracia se vea limitada, ya que las opciones ofrecidas a los ciudadanos están constreñidas a los marcos establecidos por los organismos multilaterales.

Una segunda fase del modelo comienza en la década de los 90, cuando el Banco Mundial establece como máxima prioridad la reducción de la pobreza en el sur. El estallido de la pobreza en los años 80 adquirió una relevancia tal, que se comenzó a percibir como un riesgo para la sustentabilidad política del programa neoliberal. Se temía una erosión del consenso social mínimo necesario, la proliferación de conflictos distributivos y la aparición de alternativas o movimientos anti-reforma (Ezcurra, 1998:21).⁴ En este contexto, la cuestión social se percibe como un riesgo político. Ello obligó a realizar un nuevo diagnóstico que permitiera encontrar estrategias para darle factibilidad al proyecto. A partir de entonces cobraron relevancia nociones como desarrollo humano y desarrollo social (Montufar, 2001:251).

La coyuntura anterior abrió una agenda de discusión en la que se retomó el tema de la función del Estado como órgano de redistribución de la riqueza. El Banco Mundial lanzó su estrategia que contenía principalmente dos vías. Por un lado, mantener como prioridad el crecimiento económico alto y estable y, por tanto, la acción estatal en materia de redistribución se volcó a una estrategia de focalización de las políticas sociales. Ello significó que el gasto estatal en esta materia se enfocaría en grupos sociales considerados como vulnerables (Calcagno, 2001). Esto contribuiría a reducir los costos fiscales.

La otra vía consistió en una reformulación estratégica de sectores públicos clave, como el de la educación y la seguridad social (salud y pensiones). El Estado se concentra en la prestación de los servicios básicos en estas materias, a la vez que se promueve la entrada de capital privado en su prestación, sobre todo para los servicios especializados.⁵

También se han implementado programas compensatorios de corto plazo que tienen como objetivo amortiguar las consecuencias de los ajustes estructurales y algunos padecimientos de la pobreza extrema. Se trata de programas de empleo temporal, provisión de servicios e infraestructura básica, procesos de capacitación de mano de obra y esquemas de crédito para pequeñas empresas.

Tal estrategia se ve ampliamente limitada:

- “en el cómo: solamente a través del gasto público;
- en el cuánto: los montos de recursos asignados;
- en el hacia quién: el volumen de población destinataria;
- en el desde quién: las fracciones medias; y
- en el espectro de prestaciones; circunscribirse a lo básico” (Ezcurra, 1998:28-29).

Una característica importante del Estado neoliberal es que éste se vuelca hacia una lógica de mercado. El objetivo central es promover la competitividad, para lo que se realizan una serie de procedimientos mediante los cuales se aboga por:

a) Una reducción del papel del Estado como agente directo, delegando (parte de) las prestaciones al sector privado. Es decir, se trata de agrandar la gestión u oferta privada (en especial, empresas capitalistas, aunque se añaden Organizaciones No Gubernamentales y entidades locales, en ciertos casos).

b) Una mutación substancial en la asignación de los recursos gubernamentales. En particular, se auspicia que el sistema de prestadores (públicos y privados) compita por los caudales estatales (...)

c) Un cambio decisivo en materia de fuentes. O sea, respecto del origen de los fondos: una 'diversificación' que apunta centralmente a una privatización, sí, pero ahora del financiamiento estatal. El asunto, entonces, ya no alude a los actores (quién brinda el servicio, en pro del engrosamiento de la iniciativa privada), sino a la procedencia (privada) de los recursos (fiscales); por ejemplo, el arancelamiento y, en general, la denominada 'recuperación de costos' " (Ezcurra, 1998: 30-31; ver también Duhau, 2001).

En este sentido la cuestión social se ve trasladada hacia una lógica de competencia mercantil. Charkiewicz señala que, de acuerdo con Michel Foucault,

... "la extensión de la racionalidad de mercado a los sujetos humanos y al dominio de la administración pública está en el corazón de las reformas neoliberales del gobierno. El neoliberalismo (...) promueve el comportamiento de competitividad económica y la creación de sujetos prudentes, cuya cualidad moral está ligada a la evaluación racional de costos y beneficios de ciertas acciones como comparadas a otras" (Charkiewicz, 2005:78).

Se consolida la idea primaria del modelo neoliberal de que el mercado debe ser el eje rector, trasladando sus valores incluso al Estado mismo. De esta forma, los ciudadanos son concebidos como clientes, no como sujetos de derechos.

A través de esta breve revisión de las características del modelo neoliberal observamos que se trata de un proyecto multidimensional. Se intenta moldear los diferentes mecanismos sociales en función de un sistema de distribución neoliberal que tiene alcances planetarios. Para Harvey se trata de una ideología que es útil para afirmar el poder de una pequeña élite a nivel mundial, que se beneficia de dicho modelo (Harvey, 2009).

Si bien es muy claro que tal modelo implica cierta homogeneización, no debemos perder de vista que su aplicación puede tener resultados diversos en las diferentes localidades. Ello se debe, entre otras cosas, al hecho de que los actores sociales implicados pueden no estar de acuerdo con el contenido del proyecto. No en vano han surgido movimientos a nivel global que protestan en contra del neoliberalismo, por considerarlo un sistema que genera pobreza y depreda el medio ambiente. Asimismo, al interior de los países, puede haber grupos de poder que ven afectados sus intereses y por ello presionar para matizar algunos de los mecanismos neoliberales. Por ello, el modelo, aunque es homogéneo en su concepción y está abanderado por organismos internacionales hegemónicos, puede tener diversas encarnaciones.

Lo que queda claro es que las políticas públicas, especialmente las sociales, han tenido un papel clave en la sustentabilidad política del modelo neoliberal. Son un instrumento de contención del desacuerdo y, por tanto, se trata de una estrategia de gobernabilidad. Más allá de eso, las políticas sociales han cumplido un papel importante, ya que éstas son promotoras de una cultura ciudadana que es necesaria para el neoliberalismo.

NEOLIBERALISMO Y CULTURA DE LA AUTOGESTIÓN PARA EL DESARROLLO

Como ya se ha mencionado, el modelo neoliberal requiere de un tipo de ciudadano que con su cultura política y cívica le dé sustentabilidad. Los valores de mercado deben cobrar relevancia en dicha cultura. Se trata de fomentar prácticas y actitudes en los ciudadanos que colaboren con la implementación y reproducción del modelo en todas sus dimensiones. En este contexto los programas gubernamentales son los portadores de estos valores, a través de exigencias que se hace a los ciudadanos, a fin de ser sujetos de atención estatal.⁶

Se trata, por un lado, de lograr un cambio en la idea que se tiene del Estado como proveedor de servicios. Para ello, se hace una severa crítica al paternalismo estatal y se propone una nueva cultura

de participación ciudadana, lo que sirve de justificación para el retiro del Estado de sus responsabilidades sociales.

Por otro lado, se promueven los valores de la competitividad, es decir, la lógica de mercado. La intención es que los ciudadanos se perciban a sí mismos como los responsables de la gestión de su desarrollo. En este contexto se enmarca la campaña de Vicente Fox, en la que se alentaba a los mexicanos a tener su “vocho y su changarro”,⁷ o la de promoción de la pequeña empresa mediante el lema de que “todos podemos ser Pepes y Toños”.⁸

La imagen del microempresario se empieza a expandir a través de programas de financiamiento para emprendimientos productivos, como parte de esta nueva cultura del ciudadano. Por otro lado, se realizan campañas de solidaridad con los menos favorecidos, solicitando, por ejemplo, redondeo de las cuentas en supermercados, donaciones a través de cajeros automáticos, aportaciones a Teletones, etcétera. Todo ello contribuye a fomentar una cultura de altruismo.

De esta coyuntura surge lo que he denominado Cultura de Autogestión para el Desarrollo (CAD). Ésta consiste en una serie de ideas que promueven prácticas ciudadanas que incluyen una participación activa en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y económicos de una población determinada. Bajo el cobijo de conceptos que provienen de movimientos anti-sistema, el Banco Mundial promueve prácticas que favorecen al modelo neoliberal.

Éste es el caso del término autogestión, que es un concepto acuñado desde el anarquismo (Ortiz, 2013). En el análisis de programas gubernamentales de Chile y México (Ortiz, 2010), se llegó a la conclusión de que la promoción de la CAD se encuentra presente como un elemento clave para la viabilidad social del modelo. Las ideas principales que se promueven son las siguientes:

1. El Estado no tiene responsabilidad social.⁹
2. El mercado es el mecanismo más eficiente para la distribución de la riqueza.

3. Los ciudadanos deben solucionar sus problemas por sí mismos y deben adoptar las capacidades necesarias para insertarse en el mercado.
4. La organización social con fines políticos es nociva para el desarrollo.
5. Los ciudadanos deben pagar por servicios especializados.
6. Los ciudadanos deben insertarse en los esquemas de financiamiento privado.
7. El ciudadano tiene más derechos como consumidor que como ciudadano.
8. La racionalidad de mercado debe regir todos los ámbitos de la vida.

La CAD, entonces, sirve de instrumento para la creación de ciudadanos con un alto nivel de capital social (ya que deben ser capaces de organizarse para enfrentar los desafíos que se les presenten), de capital humano (ya que deben contar con una capacitación que les permita insertarse en forma competitiva en el mercado), y capital cultural (que les permita ampliar sus alternativas de desarrollo).

Es importante resaltar el hecho de que la CAD que promueve el Banco Mundial se encuentra restringida a un marco específico determinado por él mismo. Es decir, las formas en que se practica la autogestión deben inscribirse dentro de unos límites determinados. Si una comunidad quiere ejercer autogestión sobre sus recursos naturales y esto transgrede los intereses “de mercado” o del Estado, tal intento es visto como una subversión y es castigada por el Estado.

En este sentido, las demandas de autonomía de los pueblos indígenas en América Latina no entran dentro de los marcos permitidos por la autogestión neoliberal.

En un trabajo sobre participación ciudadana y estrategias gubernamentales en Chile, Paley analiza cómo en el contexto de la transición a la democracia, el concepto de participación ciudadana es aprovechado en pro de la consolidación del modelo neoliberal. La autora señala que el término de sociedad civil –generalmente asociado a grupos que se encuentran fuera del poder del Estado–, merece un análisis más detenido, ya que “...las clases de relaciones generadas cuando gobiernos nacionales y agencias de préstamo internacionales hacen que los grupos comunitarios sean parte de sus estrategias, significa que sea más factible que las organizaciones faciliten en vez de criticar las prácticas (sic) de los gobiernos y las agencias donantes” (Paley, 2001:3).

Mientras que los ciudadanos mostraron complacencia por la promoción de una cultura participativa en Chile, después de vivir en represión durante la dictadura, la estrategia gubernamental se dirigió a delimitar los espacios en los que las organizaciones ciudadanas podrían participar.

La autora nos dice que:

... a través de los discursos y las actividades de participación de la sociedad civil, se daba la creación de sujetos autorreguladores. Estos sujetos ofrecerían su tiempo y energía en nombre de la democracia y la ciudadanía, pero no para desafiar al Estado y sus políticas de gobierno. Bajo la apariencia de brindar apoyo a la sociedad civil, un gobierno democrático puede estar sofocando realmente a la sociedad civil y los movimientos sociales que prosperaron más poderosamente al luchar contra el mando autoritario (Paley, 2001:5).

Se le otorgaron dos papeles principales a las organizaciones de la sociedad civil; por un lado el de convertirse en empresas que generaran beneficios económicos y, por el otro, el de servir como extensiones de servicios gubernamentales, lo que ayudaría al Gobierno a reducir su gasto social de manera importante (Paley, 2001:8).

En este sentido, la CAD puede entenderse aquí como una técnica de gubernamentalidad¹⁰ que promueve ideas y valores a través

de los cuales se justifica el retiro del Estado como gestor del desarrollo, donde el concepto de desarrollo tiene un claro sesgo economicista.

El discurso sobre esta nueva cultura ciudadana es un eje transversal a las políticas públicas en los países deudores. Encontramos la promoción de estas ideas en diferentes programas gubernamentales, sobre todo los de corte social. Sin embargo, tales ideas van perdiendo su forma original conforme son adoptadas por los diferentes actores que participan en la implementación de los programas gubernamentales. Existe una interpretación particular de estas ideas de acuerdo con el lugar que los diferentes actores ocupan en el espacio social.

En este sentido, el modelo neoliberal, junto con sus reformas, valores e ideas, es moldeado de acuerdo con los intereses de los actores participantes. Los gobiernos nacionales se deben ceñir a los valores de la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, etcétera; sin embargo, en regiones como América Latina no existe una cultura que dé sustento a esas prácticas. Por tanto, los gobiernos adoptan tales lineamientos a nivel formal, pero en la práctica se siguen reproduciendo muchas prácticas de los viejos esquemas. De igual forma, los ciudadanos interesados en obtener apoyos económicos del Gobierno, pueden cumplir de manera formal con los lineamientos que se les imponen, pero de facto pueden seguir reproduciendo prácticas relacionadas con los esquemas anteriores.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CULTURA DE AUTOGESTIÓN PARA EL DESARROLLO EN MÉXICO Y CHILE

El estudio de lo que aquí se denomina CAD se vuelve complejo, si consideramos que el término no existe como tal en los discursos de los organismos internacionales y/o de los gobiernos nacionales y locales. Como ya se mencionó, se trata de un conjunto de ideas que se promueve mediante programas de Gobierno, entre otros, y que forman parte de uno de los ejes transversales en la política pública de los países deudores. Por ello, para plantear las reflexiones finales, retomaré algunas de las principales ideas que se engloban en dicho

término, haciendo algunos comentarios generales sobre los casos de Chile y México.

Uno de los elementos centrales del discurso de la CAD se relaciona con la idea que los ciudadanos deben tener sobre la función del Estado y los servicios sociales que éste debe ofrecer. Desde hace ya varias décadas en México se habla de la necesidad de que el Estado se vuelva eficiente y que deje su postura paternalista, clientelista y populista. Basados en esta argumentación, se tiende a desprestigiar y criticar los gastos para programas de servicios sociales, como los de educación, salud y pensiones, por ejemplo.

Mientras los organismos encargados de dichos servicios operan con una ineficiencia cada vez más marcada, se resaltan las ventajas que se tendrían si éstos fueran ofrecidos por el sector privado. Se dice que debido a la libre competencia en el mercado, los usuarios serían beneficiados al tener diferentes opciones que compitan entre ellas por obtener más clientes.

A pesar de que en México se han hecho reformas considerables a la estructura de Gobierno¹¹ y se ha adoptado el esquema de las políticas sociales focalizadas, entre otras acciones, no se ven grandes avances en cuanto a la adquisición de una nueva visión sobre el rol del Estado. Y ello no es exclusivo del sector ciudadano; los mismos agentes de Gobierno siguen reproduciendo viejas prácticas (el clientelismo, por ejemplo), sobre todo en periodos electorales.

En una investigación sobre políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas de Chile y México, los funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), del estado de Michoacán, argumentaron que uno de los principales problemas que encuentran para la operación de programas sociales de corte neoliberal, es que las personas siguen teniendo una actitud pasiva (Ortiz, 2010). Ellos están acostumbrados a que los funcionarios del Gobierno, de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y, en general, agentes externos a las comunidades, sean los promotores de proyectos de desarrollo.

Se pueden encontrar algunos casos de liderazgos activos que logran abrir una amplia gama de opciones de financiamiento,¹² sin embargo, esto no es lo más común. Asimismo, cuando se logra echar a andar un proyecto, su sustentabilidad social es muy vulnerable. Muchas veces las comunidades no cuentan con el capital humano y/o social adecuado, por lo que el papel de los agentes de Gobierno sigue siendo crucial durante el desarrollo de dichos proyectos. En este sentido se puede decir que en México no existen las condiciones culturales adecuadas para sustentar esta nueva visión del Estado (Ortiz, 2010).

En Chile, el Estado ha dejado en el sector privado la prestación de los servicios sociales desde hace décadas. Los funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) no consideraron que la pasividad de los ciudadanos sea uno de los problemas más acuciantes que tiene el gobierno chileno. En cambio, señalan como una gran problemática la relación conflictiva que tiene el Gobierno con algunas comunidades mapuche, ya que un gran número de éstas se ha negado a inscribirse en el padrón de comunidades de la CONADI. Dichas comunidades no desean recibir recursos del Gobierno chileno, ya que consideran que es una forma de manipular los procesos sociales y políticos de dicha región (Ortiz, 2010).

En el caso de Chile se percibe que en las comunidades indígenas existe una actitud más activa en la búsqueda de opciones de desarrollo, tanto en el caso de quienes decidieron inscribirse en el padrón de beneficiarios de la CONADI, como de quienes decidieron no hacerlo (Ortiz, 2010). Ello puede tener muchas explicaciones, entre ellas que el discurso de las ideas neoliberales ha encontrado mayor eco en los ciudadanos chilenos, debido a que han estado expuestos por más tiempo al mismo. Sin embargo, no podemos asegurar que ésa sea la única causa. Se debe tomar en cuenta que la sociedad chilena cuenta con una larga tradición de organización social de los sectores populares. Las estructuras que dejó Unidad Popular, a pesar del intento de Pinochet de destruirlas, permanecen latentes. En el trabajo de Paley (2001) se describe cómo los ciudadanos ofrecieron una gran respuesta cuando el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) convocó a los diferentes sectores para construir un proyecto nacional.

Asimismo, la predisposición a la participación de los ciudadanos en Chile puede estar relacionada con las ONGs internacionales que durante la dictadura estuvieron haciendo trabajo en dicho país. Ello no significa que se acepte el carácter privado de los servicios sociales. Eso queda claro en las movilizaciones que han realizado los estudiantes de secundaria en los últimos años, quienes reclaman la educación como un derecho, y no como un bien intercambiable en el libre mercado.

Otra de las características más importantes de la CAD se relaciona con la racionalidad de mercado, donde se incluye la competitividad como uno de sus más altos valores. En México ha habido varias campañas para promover las microempresas como la alternativa más seria para adaptarse a las condiciones del modelo neoliberal. Como arriba se mencionó, Vicente Fox (2000-2006) señaló que todos los mexicanos debíamos aspirar a tener un “changarro”.

Asimismo, la campaña que tiene como personajes principales a dos jóvenes empresarios, uno llamado Pepe y otro Toño, empuja en ese sentido. En ella se invita a que todos nos convirtamos en Pepes y Toños, y que generemos nuestras propias fuentes de empleo. Las pequeñas y medianas empresas se ven como una alternativa de ingresos para los ciudadanos empobrecidos y despojados de derechos de diferente índole. En este sentido, el Programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social se renombró como Prospera al añadirsele el componente productivo. La idea subyacente en tales campañas es que cada cual debe hacerse cargo de generar sus propios ingresos, y que debe concebirse como un agente de mercado.

Las formas en que se promueve la racionalidad de mercado y la competencia son diversas, incluso algunas son muy sutiles y de tono moral.¹³ Mediante reformas jurídicas de toda índole, especialmente de tipo laboral, se despoja a los ciudadanos de derechos y se les empuja a entrar en la dinámica de libre mercado, donde muchas veces lo único que pueden ofrecer es su fuerza de trabajo. Se promueve la idea de que los emprendimientos productivos son una opción viable como fuente de ingresos. Y se apoya con recursos económicos aquellas que fomentan la formación, conservación y/o fortalecimiento del capital social comunitario. Sin embargo, se ha observado que

los emprendimientos productivos a nivel comunitario, la mayoría de las veces, genera problemas entre los miembros de los grupos.

En el caso de México se observa que muchas veces, cuando algún grupo o comunidad recibe apoyos económicos para algún emprendimiento productivo, surgen conflictos entre sus miembros (Ortiz, 2010). Son más funcionales los emprendimientos de una familia o los individuales, que los comunitarios. En el caso de Chile, encontramos que los emprendimientos comunitarios son muy escasos o, de plano, no existen. Generalmente, los proyectos productivos están a cargo de familias, ya que los comunitarios han fracasado.

Muchas de las experiencias para promover las pequeñas y medianas empresas en comunidades rurales indican que las prácticas de los miembros de los grupos no han sido motivadas por la racionalidad de mercado. A pesar de que se desea obtener beneficios económicos, muchas de las acciones de los miembros de los grupos están relacionadas con otro tipo de factores. El fenómeno de desintegración social de comunidades que se involucran en proyectos productivos no debe tomarse a la ligera y debe ser estudiado más sistemáticamente, ya que muchas veces genera, incluso, violencia.

El panorama que se observa en países como México y Chile nos indica que muchas de las acciones de los actores sociales no son determinadas por el interés de obtener los mayores beneficios económicos con el menor esfuerzo e inversión. Existen múltiples factores que participan en las decisiones de los actores. Por ejemplo, las comunidades que deciden no obtener recursos económicos del Gobierno chileno tienen como motivación principal el obtener autonomía política, antes que beneficios económicos inmediatos.

Por otro lado, los problemas de relaciones sociales que surgen de la competencia entre miembros de grupos por obtener el control de los recursos con que se cuenta, puede parecer en principio motivado por el interés de beneficiarse en lo individual y, con ello, pensar que los miembros son motivados por la racionalidad de mercado. Sin embargo, visto en perspectiva, el que un proyecto productivo comunitario no tenga éxito, resulta finalmente en una pérdida de oportunidades de obtener mayores ingresos económicos a la larga.

REFLEXIONES FINALES

A pesar de que el tema que nos ocupa es sumamente complejo, las ideas expuestas arriba nos permiten tener una visión panorámica de los procesos y fenómenos que surgen a partir de la implementación de políticas neoliberales. Si bien no se le ha dado la importancia suficiente al tema de la cultura como elemento clave del funcionamiento del modelo, podemos asegurar que en este ámbito de la vida social se encuentra la clave para la sustentabilidad del modelo. Si no existe la cultura apropiada, por más que se inviertan recursos para hacer funcional el modelo neoliberal, éste no tendrá sustento.

Finalmente, considero que es una cuestión de suma importancia preguntarnos si este modelo realmente es la única vía (como lo han asegurado sus defensores) para construir una sociedad que ofrezca oportunidades de desarrollo para sus ciudadanos.

Asimismo, podemos decir que aunque los gobiernos promueven una CAD funcional al proyecto neoliberal, de igual forma puede resultar funcional para los ciudadanos. Es posible que represente también una oportunidad para desarrollar procesos genuinos de empoderamiento ciudadano, todo depende de cómo sean interpretados los valores e ideas de ésta y cómo se refleje ello en la configuración de las relaciones de poder.

NOTAS

- 1 La separación entre estas tres esferas (Estado, mercado y sociedad) obedece sólo a fines analíticos, ya que se reconoce que en la práctica éstas mantienen relaciones sumamente complejas.*
- 2 Llama la atención la manera en que son aprovechados conceptos y nociones surgidas de demandas sociales para la funcionalidad del modelo neoliberal. Este es el caso del concepto de autogestión, que es un elemento central del pensamiento anarquista (Ortiz, 2010).*
- 3 Para conocer un análisis minucioso sobre el uso que se hace del término de "neoliberalismo", véase Boas y Gans-Morse, 2009.*
- 4 Recordemos que el levantamiento zapatista emergió precisamente el día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en México,*

- a manera de protesta por las desventajas que representaba para los pueblos originarios en el país.*
- 5 *La educación básica y los servicios médicos primarios siguen siendo un servicio estatal, mientras que la educación superior y el servicio médico especializado tienden a quedar en manos de la iniciativa privada.*
 - 6 *Por ejemplo, se les pide que se organicen bajo ciertas figuras específicas, como las cooperativas, etcétera. También se les brindan capacitaciones, donde constantemente se les alecciona sobre la necesidad de que sean ellos mismos quienes busquen sus alternativas de desarrollo, etcétera.*
 - 7 *Vocho hace referencia a los autos Volkswagen tipo sedán, mientras que changarro es el nombre popular para referirse a un negocio pequeño en México.*
 - 8 *Se trata de una campaña realizada por el Consejo de la Comunicación en México. Ver: <http://www.pepeytono.com.mx/>*
 - 9 *De hecho, Hayek argumenta que el término de "justicia social" no tiene razón de ser (Hayek, 1989).*
 - 10 *Con el término gubernamentalidad Foucault se refiere a "...todos los proyectos o prácticas tendientes a dirigir a los actores sociales a comportarse de una manera particular y hacia fines específicos, en los cuales la política del gobierno es sólo uno de los medios de regulación o dirección de la acción (Foucault, apud Schild, 1998:97).*
 - 11 *En el gobierno de Peña Nieto se han concretado algunas de las reformas más importantes de corte neoliberal. La reforma en materia energética es un claro ejemplo de ello.*
 - 12 *Como en el caso de la Comunidad Indígena Nuevo San Juan Parangaricutiro, en Michoacán.*
 - 13 *La competencia como valor se encuentra presente, por ejemplo, en los realities como Big Brother, etcétera. Diferentes personas entran a competir por sobrevivir en un juego, donde sus acciones serán juzgadas por otros contrincantes o por jurados (que muchas veces es el gran público), que los vigilan a cada momento.*

BIBLIOGRAFÍA

- ASSIES, W. (1999). "Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina", en Assies, van der Haar y Hoekema *El reto de la diversidad*, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 21-55.

- ASSIES, W.; CALDERÓN, M.A. y SALMAN, T. (eds.), (2001). *Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina*, Zamora, El Colegio de Michoacán.
- ASSIES, W. (2003). "La descentralización en perspectiva", en Assies, W. (ed.), *Gobiernos locales y reforma del Estado en América Latina*, Zamora, El Colegio de Michoacán.
- BOAS, T.C. y GANS-MORSE, J. (2009). "Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan", *Studies in Comparative International Development*, Berkeley.
- CALCAGNO, A. (2001). "Ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en América Latina", en Sader, E. (comp.), *El ajuste estructural en América Latina, costos sociales y alternativas*, Buenos Aires, CLACSO, ASDI.
- CHARKIEWICZ, E. (2005). "Corporations, the UN and Neo-liberal Bio-politics", *Development*, No. 48. Disponible en: <http://www.sidint.org/development>, consultada el 11 de julio de 2014.
- DUHAU, E. (2001). "Políticas sociales, ciudadanía y descentralización", en Assies, W., M.A. Calderón y T. Salman (eds.). *Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina*, Zamora, El Colegio de Michoacán.
- DURÁN, V.M. (2001). "Estado Social de Derecho, Democracia y Participación", ponencia VII Conferencia Latinoamericana de Trabajadores de los Servicios Públicos (México), abril. Disponible en: www.utaal.org/movimien.11e.htm, consultado el 2 de noviembre de 2004.
- EZCURRA, A.M. (1998). *¿Qué es el neoliberalismo? Evolución y límites de un modelo excluyente*, Buenos Aires, Lugar Editorial, IDEAS.
- GRIMSON, A. (2007). "Introducción", Grimson, A. (comp.), *Cultura y Neoliberalismo*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- HALE, C. (2003). "Does Multiculturalism Menace? Governance, Cultural Rights and the Politics of Identity in Guatemala", *Journal Latino American Studies*, No. 34, Cambridge.
- HARVEY, D. (2009). *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Ediciones Akal.
- HAYEK, F. (1989). "El atavismo de la justicia social", *Revista Estudios Públicos*, No. 36, Santiago. Disponible en: <http://www.cepchile.cl>, consultada el 11 de julio de 2014.
- MATO, D. (2007). "THINK TANKS, fundaciones y profesionales en la promoción de ideas (neo)liberales en América La-

- tina", en Grimson, A., *Cultura y Neoliberalismo*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- MONTUFAR, C. (2001). "Hacia un nuevo marco interpretativo de la asistencia internacional para el desarrollo", en Gómez, J.M. *América Latina y el (des)orden global neoliberal. Hegemonía, contrahegemonía*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- NICKSON, A. (2003). "La transferencia de políticas y la reforma de la administración del sector público en América Latina: el ejemplo de la Nueva Gestión Pública", en Assies, W. (ed.), *Gobiernos locales y reforma del Estado en América Latina*, Zamora, El Colegio de Michoacán.
- ORTIZ G., M.G. (2010). *Neoliberalismo de sur a norte en América Latina: la cultura de la autogestión para el desarrollo en poblaciones indígenas, los casos de Chile y México*, tesis de doctorado, Zamora, Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán.
- ORTIZ G., M.G. (2013). "Yunuén, una comunidad que se desdibuja. Turismo y capital social en una isla del Lago de Pátzcuaro", *Revista de Investigación Social*, No. 14, México, D.F., Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
- ____ (2014). "El neoliberalismo como proyecto cultural global", *Revista Internacional de Economía y Gestión de las Organizaciones*, septiembre. Disponible en: <http://ijmes.cgpublisher.com/product/pub.220/prod.36>
- PALEY, J. (2001). "La 'participación' y la 'sociedad civil' en Chile: Discursos internacionales, estrategias gubernamentales", respuestas organizacionales, ponencia *Congreso Latin American Studies Association*, Washington, DC.
- PINHEIRO, V. (1995). "Modelos de desenvolvimiento e políticas sociais na América Latina em uma perspectiva histórica", *Planejamento de políticas públicas*, No. 12, junio-diciembre, Brasilia.
- SCHILD, V. (1998). "New Subjects of Rights? Women's Movements and the Construction of Citizenship in the 'New Democracies' ", en Álvarez, S., E. Dagnino y A. Escobar (eds.), *Cultures of Politics, Politics of Cultures. Re-visioning Latin American Social Movements*, USA, Westview Press.
- TORRES, G. (1996). "La redefinición de la Política Social: entre la Política de Estado y la Política desde la Sociedad", en Valencia, E. (coord.). *¿Devaluación de la política social?*,

México, Colegio de Jalisco, Convergencia de Organismos Civiles, A.C., Foro de Apoyo Mutuo, A.C., Indicadores, Desarrollo y Análisis, A.C., Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Iberoamericana-Unidad Santa Fe.

María Guadalupe ORTIZ GÓMEZ

Doctora en Sociología. Investigadora en Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, comisionada al Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Líneas de investigación: política social y cultura de autogestión para el desarrollo. Correo E.: mgortizgo@conacyt.mx